

cribano, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones de la Dirección General de Mutilados de Guerra por la Patria de 21 de junio y 26 de agosto de 1969, se ha dictado sentencia con fecha 3 de abril de 1971 cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que con desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Luis Castrillo Escrbano, en su propio nombre y derecho, contra la Resolución de la Dirección General de Mutilados de Guerra por la Patria de 26 de agosto de 1969, confirmatoria, al desestimar el recurso de reposición, de la dictada por el propio Centro directivo en 21 de junio del mismo año, declaramos que dichas resoluciones se hallan ajustadas al ordenamiento jurídico y, en su virtud, absolvemos de la demanda a la Administración; sin hacer expresa imposición a ninguna de las partes de las costas del recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa» definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 22 de mayo de 1971.

CASTAÑON DE MENA

Excmo. Sr. Director general de Mutilados de Guerra por la Patria.

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCION del Tribunal de Contrabando de Lérida por la que se hace público el fallo que se cita.

Desconociéndose el actual paradero de Manuel Castán Solano, que tuvo su último domicilio en Ciudad de Valls, 10, Andorra la Vieja, se le hace saber, por el presente edicto, lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en Pleno, el día 23 de febrero de 1971, al conocer del expediente número 94-70, acordó el siguiente fallo:

1.º Declarar cometida una infracción de contrabando de mayor cuantía, comprendida en los casos 2.º y 4.º del artículo 11 de la Ley de Contrabando.

2.º Declarar responsables de la expresada infracción, en concepto de autor, a José Riba Betriu y en el de encubridor a Manuel Castán Solano, absolviendo a don José Riera Botet.

3.º Declarar que en Manuel Castán Solano, concurre la circunstancia modificativa de la responsabilidad siguiente: agravante 8.ª del artículo 18 de la Ley, como reincidente.

4.º Imponer las multas siguientes: José Riba Betriu, imponerle la sanción de 235.967 pesetas, que corresponde a 4,67 veces el valor de su base de 50.528, para el autor.

Manuel Castán Solano, imponerle la sanción de 25.972 pesetas, equivalente al séxtuplo de su base de 12.632 pesetas, para el encubridor.

5.º Imponer la sanción subsidiaria para el caso de insolvencia de ambos sancionados a razón de un día de prisión por cada 120 pesetas de sanción no satisfecha.

6.º Declarar el comiso del tabaco para su entrega a Tabacalera, S. A., en Lérida.

7.º Declarar haber lugar a la concesión de premio a los aprehensores.

8.º Declarar el comiso del vehículo «Seat 1400 B», matrícula B-153134 para su venta en pública subasta.

Igualmente se le notifica que contra el citado fallo ha sido interpuesto recurso de alzada para ante el Tribunal Económico-Administrativo Central —Contrabando— por don José Riba Betriu, y se le advierte que, según determina el artículo 130 del vigente Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas, durante el plazo de quince días y en la Secretaría de este Tribunal, tiene de manifiesto las actuaciones, a fin de que pueda alegar lo que estime más conveniente a la defensa de su derecho.

El importe de la multa impuesta ha de ser ingresado, precisamente en efectivo, en esta Delegación de Hacienda, en el plazo de quince días, a contar de la fecha en que se publique la presente notificación, y contra dicho fallo se puede interponer recurso de alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo Central —Contrabando—, en el plazo de quince días, a partir de la publicación de esta notificación, significando que la interposición del recurso no suspende la ejecución del fallo y que, en caso de insolvencia, se exigirá el cumplimiento de la pena subsidiaria de privación de libertad a razón de un día de prisión

por la parte de multa no satisfecha y dentro de los límites de duración máxima señalada en el artículo 24 de la Ley.

Lo que se publica en el «Boletín Oficial del Estado», en cumplimiento de los artículos 89 y 92 del Reglamento para las reclamaciones económico-administrativas de 26 de noviembre de 1959.

Lérida, a 29 de mayo de 1971.—El Secretario del Tribunal.—Visto bueno: El Delegado de Hacienda-Presidente.—3.389-E.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir por la que se declara la necesidad de ocupación de los terrenos afectados por la obra «Zona rojabe del canal de Albolote, Sector II, Redes de acequias y desagües, Pieza número 1» Termino municipal de Albolote (Granada).

Examinado el expediente de expropiación forzosa número 179-G.R. que se tramita con motivo de las obras arriba expresadas;

Resultando que en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 19 de abril de 1971, en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 13 de abril de 1971 y en el periódico «Patria» de fecha 6 de abril de 1971, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Albolote, se publicó la relación de terrenos y propietarios afectados para que pudieran presentarse reclamaciones contra la necesidad de la ocupación de los citados terrenos o aportar los oportunos datos para rectificar posibles errores en la relación;

Resultando que las respectivas informaciones transcurrieron sin oposición alguna;

Considerando que se han cumplido los trámites legales inherentes a este periodo del expediente;

Visto el dictamen favorable de la Abogacía del Estado.

Esta Dirección, en uso de las facultades conferidas por el artículo 98 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y en ejecución de lo dispuesto en los artículos 20 al 22 de la misma, ha resuelto:

1.º Declarar necesaria la ocupación de los terrenos afectados, cuya relación ya publicada se eleva a definitiva.

2.º Publicar esta declaración en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la provincia, así como en un diario de la capital de la provincia, tablón de anuncios del Ayuntamiento de referencia y notificarla individualmente a los interesados, haciéndoles saber que pueden recurrir contra ella ante el Ministerio de Obras Públicas en el plazo de diez días, a contar de la fecha de la última publicación oficial o de la notificación en su caso, y por conducto de esta Confederación.

Sevilla, 4 de junio de 1971.—El Inspector Director, M. Palanca, 3.438-E.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 1241-1971, de 14 de mayo, de clasificación académica en la categoría de Reconocido de Grado Superior del Colegio de Enseñanza Media no Oficial, femenino, «Santo Ángel de la Guarda», de Acilés (Oviedo).

En aplicación de la Ley General de Educación y financiamiento de la Reforma Educativa, número catorce/mil novecientos setenta, de cuatro de agosto, se dictó el Decreto dos mil cuatrocientos ochenta/mil novecientos setenta, de veintidós de agosto, en cuyo artículo décimo se dispone que en las autorizaciones de apertura de nuevos Centros docentes no estatales que en cualquier nivel de enseñanza hayan de iniciar su funcionamiento en el año académico mil novecientos setenta-setenta y uno, se aplicarán las normas reglamentarias vigentes al promulgarse dicha Ley, mientras no se desarrollen los preceptos correspondientes de la misma.

Dichas normas son el artículo treinta y tres de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de veintidós de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y el artículo trece del Decreto de veintiuno de julio de mil novecientos cincuenta y cinco, que aprobó el Reglamento de Centros no Oficiales de Enseñanza Media.

Cumplidos uno y otro preceptos, previos los informes favorables de la Inspección de Enseñanza Media del Estado y el Rectorado de la Universidad de Oviedo, y visto el dictamen emitido en